



**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 42**  
**O R D I N A R I A**

**MARTES 16 DE MAYO DE 2017**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En la Ciudad de México, siendo las once horas con veintinueve minutos del martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente en funciones José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

Los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales y Margarita Beatriz Luna Ramos no asistieron a la sesión, el primero por desempeñar una comisión oficial y la segunda por gozar de vacaciones, al haber integrado la Comisión de Receso correspondiente al Segundo Período de Sesiones de dos mil dieciséis.

Dada la ausencia del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el señor Ministro Cossío Díaz asumió la Presidencia del Tribunal Pleno en su carácter de decano para el desarrollo de esta sesión, en atención a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:



**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número cuarenta y uno ordinaria, celebrada el lunes quince de mayo del año en curso.

Por unanimidad de nueve votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete:

**I. 102/2014**

Acción de inconstitucionalidad 102/2014, promovida por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de los artículos 27, 32, 33, 41 y 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicados en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, mediante Decreto 768. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 27, 32, 33, 41 y 49, únicamente en las porciones normativas que indican: “delitos graves o delincuencia organizada” de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicada en el periódico oficial de la entidad el diecisiete de septiembre de dos mil catorce.*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta”.*

Dada la ausencia de la señora Ministra ponente Luna Ramos, la señora Ministra Piña Hernández se hizo cargo de la ponencia del asunto.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto en sus considerandos de competencia y legitimación, con algunos comentarios remitidos por el señor Ministro Medina Mora I.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta de los considerandos primero (modificado), segundo, tercero (modificado), cuarto, quinto, sexto y séptimo relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, a los conceptos de invalidez, a la contestación del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, a la contestación del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando octavo, relativo a la presunta inconstitucionalidad de los artículos 27, 32, 33 y 41 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, por contravenir al artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional. El proyecto propone declarar la invalidez de los citados artículos 27, 32, 33 y 41, en razón de que invaden la esfera exclusiva de atribuciones del Congreso de la Unión para establecer la legislación única en materia procedimental penal, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor del proyecto, apartándose de algunas consideraciones porque el proyecto no diferencia entre el texto de este asunto y el resuelto en la ocasión pasada.

El señor Ministro Medina Mora I. se expresó en favor del proyecto, estimando que el estudio no debe hacerse oficiosamente, pues la accionante planteó un concepto de invalidez en relación con la incompetencia del Congreso del Estado; asimismo, precisó que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 12/2014 se aprobó por unanimidad de votos, no por mayoría, como dice la propuesta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea sugirió eliminar la cita —en la página diecisiete del proyecto— de las acciones de inconstitucionalidad 12/2014 —trata de personas—, 1/2014 —secuestro y trata de personas—,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

107/2014 —bienes asegurados producto del delito—, 15/2015 —suspensión de la investigación—, 52/2015 —recurso contra el no ejercicio de la acción penal— y 74/2015 —bienes asegurados— porque no son aplicables a las medidas de protección, no abonan al caso y pueden, eventualmente, generar problemas al invocarlos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo observó que el artículo 5 de la ley impugnada prevé que “Son destinatarios de la protección prevista en esta Ley, todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su intervención actual, futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o indirecta, testigo, perito, funcionario o funcionaria del Ministerio Público o de los órganos de policía, y demás sujetos que de manera directa o indirecta intervengan en ese proceso. Las medidas de protección pueden extenderse a los familiares, por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a quienes por su relación inmediata de carácter afectivo, con quienes se señalan en el párrafo anterior, así lo requieran”, mientras que el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que “El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido”, es decir, la norma local genera una protección más amplia que la legislación nacional.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En ese sentido, y dado que el artículo transitorio octavo de dicho código indica que “En un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a sus leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la implementación de este ordenamiento”, planteó la duda consistente en si la norma local estaría o no complementando o ampliando el ámbito de protección que establece la legislación nacional.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz consultó a la señora Ministra ponente Piña Hernández si aceptaría o no las sugerencias de los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea y Medina Mora I. consistentes, por una parte, en dejar sólo la mención de los precedentes de las acciones de inconstitucionalidad 106/2014 y 29/2015 en la página diecisiete del proyecto y, por la otra, en hacer mención expresa de que no se trata de un estudio oficioso.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto con las sugerencias realizadas, precisando que verificaría si existe alguna referencia a un estudio oficioso, dado que en el proyecto se declara fundado el concepto de invalidez respectivo.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz abrió la discusión en torno a la duda del señor Ministro Pardo Rebolledo, consistente en determinar si las legislaciones locales deben tener un carácter de estricta





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

complementariedad respecto de la ley nacional o si hay posibilidad de que la extiendan.

La señora Ministra ponente Piña Hernández recordó que, en los dos precedentes que se mantuvieron en el proyecto, se analizaron leyes para proteger a las víctimas y sus familiares, entre otros sujetos del proceso penal, y se determinó que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva de regular todo lo relativo a materia procedimental penal, quedando a los Estados la de prever las cuestiones meramente operativas, mas no se discutió el tema de si las leyes locales podían extender el ámbito de protección a más sujetos.

El señor Ministro Pérez Dayán observó que el párrafo tercero de la página dieciséis del proyecto indica que “Cabe señalar que las disposiciones previstas en las normas referidas no pueden considerarse normas complementarias que resulten necesarias para la implementación del Código Nacional, en términos del Transitorio Octavo de este ordenamiento, pues no están regulando propiamente cuestiones instrumentales para su implementación”. Coincidió en que, en el caso, se tratan de medidas que no sólo implementan dicho código, sino que lo adecuan y agregan, por lo que sugirió que el proyecto abundara en esta expresión para contestar a la inquietud planteada, pues no sólo debe hacerse genéricamente —como ya está—, sino se deben precisar las normas y qué medidas contienen.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz recalcó que la facultad legislativa está asignada exclusivamente a la Federación.

El señor Ministro Pardo Rebolledo recordó que sólo planteó una duda, siendo que, si la señora Ministra ponente Piña Hernández abundara en el engrose respecto de lo que se ha considerado como normatividad complementaria, quedaría satisfecha su interrogante.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto en su párrafo tercero de la página dieciséis para desarrollar el argumento de que las normas no contienen cuestiones propiamente complementarias, conforme a los precedentes.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo a la presunta inconstitucionalidad de los artículos 27, 32, 33 y 41 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, por contravenir al artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, consistente en declarar la invalidez de los citados artículos 27, 32, 33 y 41, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas apartándose de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I. con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando noveno, relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, en las porciones normativas que dicen delitos graves o delincuencia organizada. El proyecto propone declarar la invalidez del citado artículo 49, en la porción normativa “delitos graves o delincuencia organizada”, en razón de que, por un lado, invade la esfera competencial del Congreso de la Unión, contenida en el artículo 73, fracción XXI, inciso b), constitucional, para expedir la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ello deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada y, por otro lado, el artículo 20, apartado C, fracción V, párrafo segundo, constitucional establece que “El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso”, por lo que no existe razón alguna para que se restrinjan los programas de protección tratándose de delitos graves.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se manifestó de acuerdo con el proyecto, pero sólo por el argumento de competencia, pues resulta suficiente para justificar la invalidez propuesta.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz estimó que, dado que se trata de un problema de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Incompetencia general del legislador del Estado, debería declararse la invalidez total del artículo, en términos similares a lo expuesto por el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

La señora Ministra ponente Piña Hernández anunció voto concurrente, en tanto que el argumento de incompetencia es suficiente para declarar la invalidez total del artículo combatido. Aclaró que el estudio se realizará en suplencia de la queja, ya que la accionante no refirió específicamente a esa cuestión, por lo que, si se alcanza la mayoría suficiente, modificará el proyecto en ese sentido.

El señor Ministro Pérez Dayán advirtió que el proyecto concluye en su página veinte que “c) Sin embargo, toda vez que desde la Constitución Federal se reservó la facultad legislativa en la materia a la Federación, el margen de actuación por parte de las autoridades de las entidades federativas en las hipótesis de la fracción V a que se hizo referencia, se encuentra limitado a la investigación, persecución, procesamiento y sanción de esos delitos, sin que puedan legislar al respecto”, siendo que la pretensión de la norma impugnada no es regular la delincuencia organizada, sino instrumentar las medidas para la protección de personas que estén en situación de riesgo, entre otras, tratándose de delitos graves o delincuencia organizada.

En ese sentido, reflexionó que no debería declararse la invalidez de la norma por la sola mención de la delincuencia organizada, máxime que su objetivo no es la regulación de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

este fenómeno delictivo, sino de un programa de protección a las personas que, por su situación de riesgo, lo merecen, además de que a la Federación no le corresponde encargarse de la protección de determinadas personas en situación de riesgo en cuestiones de delincuencia organizada, sino a la entidad federativa.

Así, concluyó que la norma no genera franca ni directamente una invasión de competencias. Aclaró que aún resta mucha discusión en torno a este tema, por lo que en ese tiempo formará y definirá su voto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo retomó que el proyecto aborda dos líneas argumentativas: 1) la incompetencia de la autoridad legislativa local para regular la delincuencia organizada, y 2) la limitación de la aplicación de estas medidas de protección sólo para delitos graves o delincuencia organizada, siendo que el texto constitucional no marca ninguna restricción al respecto.

Estimó que la norma cuestionada podría encuadrar como operativa y que complementa el Código Nacional de Procedimientos Penales porque trata de un programa para ejecutar estas medidas de protección, siendo que su párrafo segundo agrega que “El Programa establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección para la persona, así como los apoyos para solventar sus necesidades personales básicas cuando por su intervención en el Procedimiento Penal así se requiera”.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Se decantó por eliminar únicamente la porción normativa propuesta porque, en primer término, el legislador local no tiene competencia para pronunciarse sobre la delincuencia organizada y, en segundo término, resultaría contraria al artículo 20, apartado c), fracción V, párrafo segundo, constitucional, en cuanto a la limitación a los delitos graves.

El señor Ministro Laynez Potisek coincidió con el señor Ministro Pardo Rebolledo, pero inclinándose más por el argumento de contravención al artículo 20, apartado c), fracción V, párrafo segundo, constitucional, pues éste no distingue los tipos de delitos sobre los que se debe proteger a las víctimas, a los inculpadados y a cualquier persona que intervenga en el procedimiento penal, por lo que estará por la invalidez únicamente de la porción normativa postulada.

El señor Ministro Medina Mora I. coincidió con esta interpretación pues, de eliminarse la totalidad del precepto, se anularía el ámbito operativo del programa de protección.

El señor Ministro Pérez Dayán se sumó a esta interpretación, para declarar la invalidez de la porción normativa propuesta.

El señor Ministro Franco González Salas leyó el párrafo primero de la norma en estudio: "El Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada”, por lo que consideró que la eliminación de la porción normativa resultaría en un cambio sensible en su ámbito de aplicación, es decir, la voluntad expresa del legislador local. Aclaró que su posición no implica una propuesta interpretativa distinta.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, ante la reflexión del señor Ministro Franco González Salas, consultó a la señora Ministra ponente Piña Hernández cuál sería la propuesta definitiva del proyecto.

La señora Ministra ponente Piña Hernández estimó que el segundo párrafo del artículo combatido podría considerarse instrumental al primero, pues postula que “El Programa establecerá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, mecanismos de protección para la persona, así como los apoyos para solventar sus necesidades personales básicas cuando por su intervención en el Procedimiento Penal así se requiera”, pero le convenció lo mencionado por el señor Ministro Franco González Salas, en tanto que era la intención del legislador establecer dicho programa únicamente para los delitos graves o delincuencia organizada.

Modificó el proyecto para proponer la invalidez total del artículo impugnado.

El señor Ministro Laynez Potisek aclaró que, con esa nueva propuesta, el efecto sería que se dé la protección a





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

quienes participen directa o indirectamente en el proceso penal.

El señor Ministro Medina Mora I. concordó en que, si sólo se elimina la porción normativa originalmente propuesta, se cambiaría la intención del legislador local de limitarlo a los delitos graves o delincuencia organizada, pero también eliminar todo el precepto dejaría más abierto el supuesto. Por tanto, secundó la propuesta de los señores Ministros Pardo Rebolledo y Laynez Potisek.

La señora Ministra ponente Piña Hernández consultó si sería pertinente únicamente eliminar el primer párrafo de la norma impugnada o ambos.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz estimó que, dado que el segundo es instrumental al primero, sería conveniente mantener la propuesta de eliminar la totalidad del artículo.

Recapituló que la otra propuesta mencionada es eliminar únicamente la porción normativa “que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada”.

El señor Ministro Pardo Rebolledo precisó que el concepto de invalidez se enfocó en que, al limitarse la procedencia de las medidas a los delitos graves o delincuencia organizada, se contraviene el artículo 20 constitucional, pues éste no contiene esa limitante, por lo que el vicio de constitucionalidad se salva si se elimina la última parte del párrafo primero del artículo impugnado, para





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

leerse: “El Programa tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal”, con lo cual se hace congruente, además, con lo señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Valoró que, tal vez, también podría invalidarse la palabra “exclusivamente” para evitar otra interpretación.

Puntualizó que el segundo párrafo, al prever simplemente la operación de ese programa, no contiene el aludido vicio de inconstitucionalidad.

El señor Ministro Franco González Salas recordó que no quiso elaborar una nueva propuesta, sino que sólo iba a votar por la invalidez total del precepto, para el efecto de que el legislador local quede en libertad de volver a legislar lo que considere pertinente, en tanto que esta Suprema Corte no debe sustituirse en la voluntad del legislador. Adelantó que, en estos términos, formulará su voto concurrente.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando noveno, relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, consistente en declarar la invalidez del citado artículo 49, respecto de la cual se expresó una mayoría de cinco votos a favor de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández y Presidente en funciones Cossío Díaz. Los señores Ministros Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek y Pérez Dayán se manifestaron por la invalidez únicamente de la porción normativa “que verse sobre delitos graves o delincuencia organizada”.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz apuntó a que existen precedentes en los que los votos de invalidez total se han sumado a la parcial y, así, alcanzan una mayoría calificada.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea retomó que hay muchos precedentes en los que la invalidez total se suma a los votos de la parcial; sin embargo, en el caso sostuvo su voto por la total, dado que, como indicó el señor Ministro Franco González Salas, la parcial implica cambiar la voluntad del legislador local y el sentido del precepto, en lugar de darle la oportunidad de legislar de nuevo.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena estimó que podría sumar su voto, desde un punto de vista práctico pues, de lo contrario, se desestimaría la acción.

El señor Ministro Franco González Salas consideró que, de dejarse el precepto intocado, se mantendría una evidente inconstitucionalidad; de sumar su voto a la invalidez parcial, tendría que explicar en un voto; pues, de lo contrario, se desestimaría la acción y seguiría vigente el artículo impugnado.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea adelantó que no tendría inconveniente en sumarse a la invalidez parcial, pero exhortó a quienes están por la invalidez parcial a reconsiderar su voto, ya que, de lo contrario, resultaría un engrose con consideraciones mayoritarias atípicas.

El señor Ministro Laynez Potisek explicó que el postulado del señor Ministro Franco González Salas es declarar la invalidez total del precepto por una deferencia al legislador local; sin embargo, en el caso no sólo se hizo valer una cuestión competencial, sino una limitación que no contiene el artículo 20 constitucional, es decir, distinguir a las víctimas por función del tipo de delito, por lo que estimó que eliminar únicamente la referida porción normativa no conllevaría una sustitución de este Tribunal Pleno en la voluntad del legislador local.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena recordó que también existen precedentes en los que los argumentos que predominan son los de la mayoría dentro de otra mayoría, siendo el caso que el razonamiento residió en la incompetencia.

El señor Ministro Medina Mora I. valoró como compleja la tarea del ponente para engrosar y encontrar un sentido racional, porque los posicionamientos disimilares de los señores Ministros no necesariamente se suman. Por eso, estimó que la solución podría ser a la inversa: que los de la invalidez parcial se sumen a la total, en tanto que el artículo 20, apartado c), fracción V, párrafo segundo, constitucional





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

no distingue el tipo de delito, además de que la aplicación de un programa de protección tendrá que atender al riesgo, es decir, no se otorgará a cualquiera que no lo necesite. Por tanto, y aun cuando convino con la propuesta del señor Ministro Pardo Rebolledo, anunció que no tendría inconveniente en generar una mayoría por la invalidez total del precepto.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz exhortó a los integrantes a no describir el problema, sino a tomar una posición concreta, como lo acaba de hacer el señor Ministro Medina Mora I.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto para proponer la invalidez total de la norma, con base en los dos argumentos de incompetencia —de medida cautelar genérica y de delincuencia organizada— y por ser violatorio del artículo 20, apartado c), fracción V, párrafo segundo, constitucional.

El señor Ministro Pérez Dayán estimó que las acciones de inconstitucionalidad se deben resolver atendiendo sucesivamente a los conceptos de invalidez. En el caso, se esgrimieron dos: 1) de incompetencia, que apunta a la invalidez de todo el artículo impugnado, y 2) de contradicción al artículo 20 constitucional, al excluir cierto tipo de delitos. Apuntó no estar de acuerdo con el primer concepto, pues ésta norma fue la forma en que el legislador local complementó la instrumentación correspondiente y, por el contrario, estaría por declarar fundado el segundo, pues





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

excluyó ciertos delitos de un sistema de protección. Por tanto, se reiteró por la invalidez parcial del precepto, en ese aspecto.

El señor Ministro Pardo Rebolledo meditó que no se debe propiciar la persistencia de un precepto inconstitucional sólo porque no se alcanza una votación calificada en uno u otro sentido, por lo que anunció que sostendrá su punto de vista en un voto concurrente, pero se sumará a la invalidez total.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando noveno, relativo a la presunta inconstitucionalidad del artículo 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, consistente en declarar la invalidez del citado artículo 49, con base en los dos argumentos de incompetencia —de medida cautelar genérica y de delincuencia organizada— y por ser violatorio del artículo 20, apartado c), fracción V, párrafo segundo, constitucional, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek y Presidente en funciones Cossío Díaz. El señor Ministro Pérez Dayán votó en contra. Los señores Ministros Pardo Rebolledo y Medina Mora I. anunciaron voto concurrente minoritario.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando décimo, relativo a los efectos.

Modificó el proyecto para ajustarlo respecto de la invalidez total del artículo 49 impugnado.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena no compartió los efectos como están planteados, pues deberían surtir a partir de la entrada en vigor de la norma, por ser materia penal, y no de la notificación de los puntos resolutivos, como ha votado en precedentes.

El señor Ministro Medina Mora I. coincidió con el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz instruyó al secretario general de acuerdos para que informara cuál es el criterio del Tribunal Pleno en este tipo de efectos.

El secretario general de acuerdos informó que se distingue entre el momento a partir del cual surte efectos el fallo de este Tribunal Pleno y los efectos retroactivos a la entrada en vigor de la norma impugnada, por tratarse de la materia penal. En ese sentido y en el caso concreto, se diría que la declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos, consistentes en su expulsión del orden jurídico, desde la fecha de su entrada en vigor, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en términos del considerando décimo de esta sentencia.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro Pérez Dayán precisó que diversos artículos de la ley impugnada refieren al programa previsto en el artículo 49 invalidado totalmente, por lo que deben localizarse las disposiciones que dependen de dicho artículo, pues dejarían de tener razón de existir.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz propuso adelantar el receso para, en ese tiempo, revisar la ley impugnada y localizar si existen o no preceptos que deben declararse inválidos por extensión.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz decretó un receso a las doce horas con cincuenta minutos y reanudó la sesión a las trece horas con doce minutos.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que existen más de veinticinco artículos en la ley impugnada que refieren al precepto 49 invalidado; no obstante, también son complementarias de otras partes del ordenamiento, además de que, de eliminarse la referencia al programa en cuestión, perderían toda congruencia. Por ende, desistió de su solicitud anterior.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que, en el caso, al tratarse de normas que establecen medidas de protección para personas que pueden estar relacionadas con un procedimiento penal, no resultaría adecuado darle efectos retroactivos a la declaratoria de invalidez a partir de la entrada en vigor de la norma, porque redundaría en un





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

perjuicio para las personas que están gozando de este régimen de medidas de protección.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto para eliminar los efectos retroactivos pues, de conformidad con el artículo 105, fracción III, párrafo segundo, constitucional —“La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia”—, sólo deben imprimirse este tipo de efectos cuando redunden en un beneficio a los gobernados.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando décimo, relativo a los efectos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*Invalidéz de los artículos 27, 32, 33, 41 y 49 de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, en términos del considerando décimo de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

II. 2/2015

Acción de inconstitucionalidad 2/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 27 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diez de diciembre de dos mil catorce. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 27 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial de la entidad el diez de diciembre de dos mil catorce. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta”*.

Dada la ausencia de la señora Ministra ponente Luna Ramos, la señora Ministra Piña Hernández se hizo cargo de la ponencia del asunto.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta de los considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, a los conceptos de invalidez, a la contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a la contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos y a las causas de improcedencia, la cual se aprobó en





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando octavo, relativo al estudio. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 27 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos —“Artículo 27.- Resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el Juez disponga. Cuando el Juzgador decrete la presente medida, establecerá el lugar, tiempo y las condiciones particulares bajo las cuales deberá de cumplirse; por lo que la unidad competente en medidas cautelares y salidas alternas, realizara la supervisión de acuerdo a lo ordenado por la autoridad judicial”—, en razón de que el Congreso de la Unión tiene atribución exclusiva para legislar en materia de delincuencia organizada y la autorización constitucional para arraigar a una persona, única y exclusivamente por este tipo de conductas, pues en ese sentido se esgrimió el concepto de invalidez de la accionante.

Modificó el proyecto para declarar la invalidez, en suplencia de la queja, bajo el argumento de que el Congreso de Morelos no tenía competencia para legislar en cuanto a las medidas cautelares, al comprender la materia de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedimientos penales, la cual está reservada al Congreso de la Unión.

El señor Ministro Laynez Potisek se manifestó de acuerdo con la propuesta modificada porque la incompetencia deriva de las medidas cautelares que ya previó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no por las razones argumentadas por la accionante.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz coincidió con el proyecto modificado, y agregó que vota por la invalidez por la razón adicional consistente en que la medida cautelar de privación de la libertad no está prevista expresamente en la Constitución.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando octavo, relativo al estudio, consistente en declarar la invalidez del artículo 27 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, bajo el argumento de que el Congreso de Morelos carece de competencia para legislar en cuanto a las medidas cautelares, al trascender a la materia procedimental penal, la cual está reservada al Congreso de la Unión, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz con razones





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

adicionales. El señor Ministro Franco González Salas anunció voto concurrente.

La señora Ministra ponente Piña Hernández presentó el considerando noveno, relativo a los efectos. El proyecto propone determinar efectos retroactivos, por tratarse de una disposición general emitida por el Congreso local, debiendo corresponder en cada caso al juzgador determinar qué pruebas carecen de valor probatorio por encontrarse directa e inmediatamente vinculadas con el resguardo domiciliario, dado que dicho valor no se pierde en automático por la referida declaratoria, como se ha resuelto por mayoría en precedentes recientes.

Adelantó que, personalmente, no suscribirá esos efectos, como ha sido su votación reiterada.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea preguntó si el proyecto se modificaría para no proponer efectos retroactivos, sino dejarse como en las acciones de inconstitucionalidad 90/2015, 2/2016 y 6/2015 y su acumulada 7/2015, es decir, que se deja a la decisión de los operadores jurídicos.

La señora Ministra ponente Piña Hernández aclaró que se establecen efectos retroactivos pero, además, se deja al operador jurídico determinar cada caso concreto.

El señor Ministro Franco González Salas reseñó que en la Secretaría General de Acuerdos se le informó que el último precedente al respecto fue la acción de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Inconstitucionalidad 61/2016, en la cual se aprobó: “determinar, por un lado, que [los efectos] surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión y, por otro lado, que la invalidez decretada surtirá efectos retroactivos al diecisiete de junio de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver, en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y las disposiciones legales aplicables en esta materia”, lo que se aprobó por unanimidad de diez votos, aclarando que en esa sesión él no asistió.

La señora Ministra ponente Piña Hernández modificó el proyecto con el apunte del señor Ministro Franco González Salas.

El señor Ministro Laynez Potisek consultó si se mantendrían los efectos retroactivos a la fecha en que entró en vigor la norma impugnada.

La señora Ministra ponente Piña Hernández respondió en sentido afirmativo, pues se trata de una legislación penal, además de que cada operador jurídico va a determinar, en el caso concreto, si le beneficia o no.

El señor Ministro Laynez Potisek anunció voto en contra.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la propuesta modificada del considerando





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Noveno, relativo a los efectos, consistente en determinar, por un lado, que surtirán a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Morelos y, por otro lado, que la invalidez decretada surtirá efectos retroactivos a la fecha en que entró en vigor la norma impugnada, correspondiendo a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver, en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y las disposiciones legales aplicables en esta materia, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz. El señor Ministro Laynez Potisek votó en contra y anunció voto particular. Los señores Ministros Piña Hernández y Presidente en funciones Cossío Díaz anunciaron sendos votos concurrentes.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz, el secretario general de acuerdos leyó los puntos resolutivos que regirán el presente asunto, en los siguientes términos:

*“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 27 de la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diez de diciembre de dos mil catorce, la cual surtirá sus efectos,*





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

*consistentes en su expulsión del orden jurídico desde la fecha de su entrada en vigor, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Poder Legislativo del Estado de Morelos, en términos del considerando noveno de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, y en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.”*

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz sometió a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente en funciones Cossío Díaz.

El señor Ministro Presidente en funciones Cossío Díaz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los señores Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con veintinueve minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves dieciocho de mayo del año en curso, a la hora de costumbre.





Sesión Pública Núm. 42

Martes 16 de mayo de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente en funciones José Ramón Cossío Díaz y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.

SUPREMA CORTE DE  
JUSTICIA DE LA NACIÓN  
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN